

Talca, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LOS ROLES 1428 -2018 Y 1476-2018:

PRIMERO: Que atendido lo expresado en estrados por ambos recurrentes, se tienen por desistidos los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones de 24 de julio de 2018 escrita a folio 248 de la causa rol 1.648 del Cuarto Juzgado de esta ciudad y la pronunciada el 6 de agosto de ese año, que se lee en el folio 287, sin costas.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.

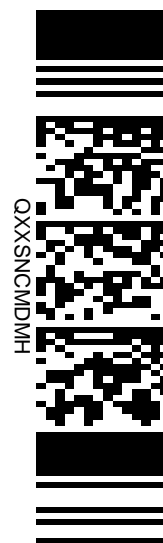
SEGUNDO: Que la demandada, recurrente de apelación, en esta instancia opone la excepción de prescripción extintiva, aduciendo que el actor celebró dos contratos de prestación de servicios educacionales con la Universidad Autónoma de Chile, uno suscrito el 25 de Febrero del año 2010 que terminó el día 31 de Diciembre de ese año y el segundo el 31 de enero del año 2011, que finalizó el 31 de diciembre de ese mismo año, obteniendo el año 2013 el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; continúa diciendo que el 18 de agosto de 2015, la Excm. Corte Suprema rechazó el juramento como abogado del actor, dado que la convalidación de estudios efectuada por la Universidad Autónoma de Chile, mediante la Resolución de fecha 26 de Febrero de 2010, de las asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepción entre los años 1987 y 1995, fue otorgada “sin que aparezca de manera alguna en la resolución de convalidación que se hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma.”

Sostiene que habiéndose ingresado la demanda el 10 de Julio de 2017, siendo notificada a su parte el 25 de ese mismo mes y año, señalándose en dicho libelo que la defectuosa convalidación de



asignaturas, devino en que el Título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, no fuera considerado apto por la Corte Suprema para prestar juramento como abogado, ejerciéndose las acciones de cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios y subsidiariamente, la de indemnización de perjuicios por incumplimiento imperfecto, procede declararlas prescritas, pues el plazo para ello, ha corrido completo. Sostiene que la Excma. Corte Suprema resolvió como lo hizo, cuando la acción ya se encontraba prescrita, al igual que había precluído, por su parte, la posibilidad de subsanar la omisión, insistiendo que las acciones están prescritas, sea que se cuente el plazo desde la resolución de convalidación, fechada 26 de Febrero de 2010, se compute desde el término del contrato bajo cuyo imperio se realizó dicha convalidación al terminar el año académico 2010; o se cuente desde la terminación del segundo y último contrato celebrado entre las partes, esto es, el día 31 de diciembre de 2011, cuando concluyó el año académico 2011, concluyendo que a la fecha de interposición de la demanda, 10 de julio de 2017 notificada el 25 de Julio de ese año, transcurrió el plazo de cinco años requeridos para que prescribiera su responsabilidad contractual.

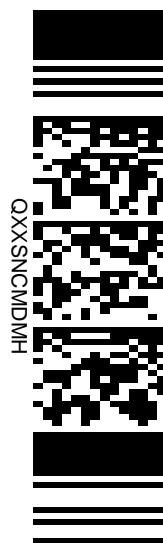
Para el articulista la prescripción no puede empezar a correr a partir del otorgamiento del título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pues ello contradice lo estipulado en las cláusulas segunda y tercera de los dos únicos contratos habidos entre las partes y altera lo resuelto por la Excma. Corte, que solo objeta la resolución convalidatoria, la que individualiza con toda precisión, no pudiendo dicha resolución interpretarse en forma extensiva, y contraria a lo prescrito en el inciso 2º del artículo 3 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, cuando él no ha sido parte en esos antecedentes administrativos, señalando que por las mismas razones, el plazo de prescripción, tampoco puede nacer conjuntamente con la Resolución de la Excma. Corte Suprema, pues ello equivale a dejar incierta e indeterminada la vigencia de la obligación, sujeta su



exigibilidad a un hecho posterior y ajeno al contrato, que puede o no ocurrir, dependiente de la mera voluntad del acreedor, hasta que quisiera hacer valer sus derechos, lo que la ley prohíbe y pugna con la definición misma del plazo y de la institución de la prescripción, contenida en los artículos 1494 y 1081 del Código Civil. En consecuencia, el plazo de prescripción corre independientemente del descubrimiento del vicio.

Arguye que la vigencia de los contratos fue establecida en las cláusulas segunda y tercera de ambos, por lo que cualquier acción ordinaria tendiente a obtener una declaración de responsabilidad y la devolución de lo dado o pagado en razón de ellos, originada en el cumplimiento imperfecto de una obligación ejecutada durante su vigencia, debe declararse prescrita, por haberse intentado pasados los cinco años, desde la ocurrencia del acto o terminación del contrato que le sirve de causa o fuente, acotando que la obligación insatisfecha que se demanda, deviene del contrato, al igual que la acciones que se intentan, por lo que extinguido el contrato, que es la fuente de las obligaciones y responsabilidades que del mismo emanan, las acciones consiguientes, no pueden sobrevivir más allá del plazo que la misma ley establece en el artículo 2515 del Código Civil, agregando que la prescripción no fue interrumpida por el acreedor, ni renunciada por su parte, en conformidad al artículo 2495 del Código Civil, por medio de mandatario facultado para enajenar, esgrimiendo que el plazo sólo puede contarse desde la infracción contractual o prestación defectuosa, pues en ese momento se hace exigible la obligación, al igual que lo señala ley 19.496 de protección al consumidor, que cita el actor en su demanda, al expresar en su artículo 26 que: “Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva.”

TERCERO: Que contestando el actor afirma que las acciones no se encuentran prescritas recordando que, como lo reconoce el



oponente, la Excma. Corte Suprema con fecha 18 de agosto de 2015, rechazó el juramento como abogado del actor, dado que la convalidación de estudios autorizada por la Universidad Autónoma de Chile, mediante la Resolución de fecha 26 de Febrero de 2010, de las asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepción entre los años 1987 y 1995, fue autorizada “sin que aparezca de manera alguna en la resolución de convalidación que se hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma, refiriéndose al Reglamento General del Alumno de la Universidad Autónoma, aprobado por Resolución de Rectoría N° 80/2006, cuyo artículo 51 dispone en el inciso primero, que: “Sólo se homologarán o convalidarán asignaturas aprobadas dentro de los diez años anteriores a la fecha de la solicitud de homologación. Este plazo no regirá respecto de los alumnos que acrediten experiencia laboral significativa en el área.”

Sostiene que el plazo de prescripción no pudo comenzar a correr en contra del acreedor si, como declara la contraria – en lo que constituye una confesión judicial – nadie se percató del error en ese momento y que su dictación y corrección o complementación, es una de las “facultades privativas” de la Universidad Autónoma, toda vez que el actor no tuvo ninguna injerencia en ese acto privativo de la Universidad, como expresamente se indica en el motivo 21° de la sentencia de primera instancia: “la Resolución de Rectoría N°04/2016, que complementa la N°16/2010, fue una respuesta a la insistencia del demandante para obtener su título profesional, y a pesar que la demandada trató de enmendar su falta, dicha resolución no fue apta o idónea para el fin que se esperaba, que no era otro que recibir el título de abogado; sin que conste que el alumno YÁÑEZ haya tenido participación ni responsabilidad alguna en tales hechos, pues en su oportunidad acompañó todos los antecedentes para ser aceptado por vía especial y luego rindió examen de conocimientos relevantes, prueba



que le fue certificada positivamente.”, reproduciendo además lo que se dice en el apartado 22°.

Acota que la Universidad, durante la tramitación del expediente de Titulación de Reinaldo Yáñez con posterioridad a la resolución de 18 de agosto de 2015, que dispuso el rechazo de la solicitud, acompañó la Resolución de Rectoría N° 04/2016, de fecha 11 de Enero de 2016 en la que se resuelve complementar resolución N°16/2010, diciendo, “Que la convalidación de las asignaturas se realizó conforme la excepción contenida en el artículo 51 del Reglamento del Alumno, esto es, por haber acreditado el solicitante “experiencia laboral significativa en el área”.

Conforme a lo argumentado sostiene que debe descartarse que el plazo de prescripción hubiere comenzado a computarse desde el ingreso del demandante a la Universidad Autónoma, o desde la fecha de la convalidación de asignaturas, afirmando que solo con la resolución de la Excma. Corte Suprema, de 18 de agosto de 2015, salió a la luz el hecho generador en que incurrió la contraria, momento en el cual cuando se completaron todos los elementos de la responsabilidad contractual, esto es, la concreción del perjuicio causado por la acción u omisión del deudor, sin el cual no existiría tal responsabilidad, al ser un presupuesto de la misma, a consecuencia de lo cual se produjeron los perjuicios, los que se siguen produciéndose en el tiempo.

CUARTO: Que, resumiendo, el oponente señala como inicio del plazo de la prescripción la fecha de los contratos celebrados por el actor con la Universidad Autónoma de Chile, uno suscrito el 25 de Febrero del año 2010 que terminó el día 31 de Diciembre de ese año y el segundo el 31 de enero del año 2011, que finalizó el 31 de diciembre de ese mismo año, obteniendo el año 2013 el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, por lo que habiéndose ingresada la demanda el 10 de Julio de 2017 y notificada a su parte el 25 de ese mismo mes y año, las acciones impetradas están prescritas,



acotando que ya lo estaban cuando la Corte Suprema rechazó la petición del postulante; en definitiva afirma que a la fecha que se interpone la demanda 10 de julio de 2017 y se la notifica el 25 de ese mes y año, transcurrió el plazo de cinco años requeridos para que prescribiera su responsabilidad contractual.

Por su parte el actor se opone a la excepción sosteniendo que el plazo comienza a correr desde 18 de agosto de 2015, cuando la Corte Suprema rechaza el juramento como abogado del actor, dado que la convalidación de estudios autorizada por la Universidad Autónoma de Chile, mediante la Resolución de fecha 26 de Febrero de 2010, de las asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de Concepción entre los años 1987 y 1995, fue autorizada “sin que aparezca de manera alguna en la resolución de convalidación que se hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma, refiriéndose al Reglamento General del Alumno de la Universidad Autónoma, aprobado por Resolución de Rectoría N° 80/2006, agregando que la Universidad, durante la tramitación del expediente de Titulación de Reinaldo Yáñez, con posterioridad a la resolución de 18 de agosto de 2015, acompañó la Resolución de Rectoría N° 04/2016, de fecha 11 de Enero de 2016 en la que se resuelve complementar resolución N°16/2010, pretendiendo enmendar lo observado por la Corte Suprema.

Afirma que solo con la resolución de la Excma. Corte Suprema, de 18 de agosto de 2015, salió a la luz el hecho generador en que incurrió la contraria, momento en el cual se completaron todos los elementos de la responsabilidad contractual.

QUINTO: Que el artículo 2514 del Código Civil establece que la prescripción extintiva de las acciones exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, tiempo que se computa desde que la obligación se haya hecho exigible; de acuerdo al artículo 2515 del mismo compendio legal la prescripción en el caso de autos, es de 5 años.



Entendiéndose que lo que se cuestiona es el cumplimiento imperfecto del contrato, es dable admitir la alegación del actor y colegir que dicho plazo se cuenta desde la fecha que la Corte Suprema rechazó el juramento del señor Yáñez, esto es, el 18 de agosto de 2015, momento en el cual el mencionado contrato no se perfeccionó, por ende a la fecha de interposición y notificación de la demanda, 10 y 25 de julio de 2017, respectivamente no habían transcurrido los cinco años exigidos por el legislador. De consiguientes las acciones impetradas en la demanda que da origen a esta causa no están prescritas.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION:

SEXTO: Que la demandada interpone recurso de casación formal, en contra de la sentencia dictada el 7 de febrero del año próximo pasado por la juez suplente del Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Talca, doña Andrea Suazo Quiroz, aduciendo que la sentenciadora al dictar la sentencia incurrió en el vicio señalado en el n° 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, ya que contiene decisiones contradictorias como visualiza en los motivos 19 y 20 del fallo recurrido, toda vez que de ellos fluye que la sentenciadora sostiene que el contrato que vinculó a las partes fue cumplido e incumplido a la vez, solicitando que se anule la sentencia, dictando otra de reemplazo que rechace la demanda.

SÉPTIMO: Que en el apartado 19° la juez adhiere a aquella doctrina que sostiene “que no se requiere que el contrato del que nace la obligación incumplida esté vigente al momento de hacerse valer la responsabilidad contractual”, amparándose en la autonomía de la pretensión indemnizatoria como lo que ha sostenido la Corte Suprema, esto es, , afirmando que ese tribunal “(...)ha arribado a la conclusión de que la acción indemnizatoria es independiente de la acción de cumplimiento forzado del contrato o de resolución del mismo”.

Afirma que los contratos suscritos por las partes: “son documentos que constituyen el requisito primordial en la sede que nos encontramos, en cuanto se prueba la existencia de las referidas



convenciones; requisito que se da por verificado, independientemente de si los respectivos contratos, se encuentran aún pendiente de ejecución, cumplidos parcialmente o extinguido por alguna causa legal”; copia lo que dijo el actor “que se cumplieron cuando el actor terminó el respectivo año de estudio” (sic)”, para luego afirmar que su representada ha dado estricta observancia a todas y cada una de las obligaciones contraídas en virtud del referido acuerdo.

A partir de ese preámbulo la juez expresa que corresponde analizar cuál o cuáles fueron las obligaciones adquiridas por la demandada y cuáles en su oportunidad, fueron las del demandante para determinar que éste no estuviese en mora, concluyendo que del análisis de los elementos de convicción, el demandante fue alumno regular de la carrera de Derecho impartida por la demandada, de la cual según consta en acta de examen de grado de la carrera, se tituló (sic) el 18 de diciembre de 2013, adquiriendo la calidad de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, reputando que a la fecha del examen había aprobado la totalidad de la asignaturas de su plan de formación, como también las especiales que se le impusieron para admitirlo como alumno regular, infiriendo que el contrato se cumplió al obtener el grado académico que se ofreció, y por lo mismo no cabe exigir su cumplimiento forzado a la luz de lo dispuesto del artículo 1489, lo que no obsta a la acción de indemnización de perjuicios de manera autónoma, tal como lo hizo valer el actor de manera subsidiaria en su oportunidad.

Continúa la sentenciadora, reafirmando la interpretación a la que adscribe es decir, aquella según la que no se requiere que el contrato del que nace la obligación incumplida esté vigente al momento de hacerse valer la responsabilidad contractual, reiterando que la Corte Suprema ha arribado a la conclusión de que la acción indemnizatoria es independiente de la acción de cumplimiento forzado del contrato o de resolución del mismo (fallo de fecha 31 de octubre de 2012, rol 3325-2012 y fallo de fecha 28 de enero de 2013, rol 5898-2012),



abandonando la interpretación tradicional del artículo 1489 del Código Civil, aceptando que la víctima de un daño producido con ocasión de un incumplimiento contractual demande únicamente la indemnización de dichos perjuicios sin necesidad de pedir, además, la resolución del contrato o el cumplimiento forzado de las obligaciones emanadas de él.

Termina diciendo que existe claridad respecto de que los contratos que unieron a las partes y a propósito de los cuales se generó el eventual daño, habían terminado precisamente porque el actor obtuvo el grado de licenciado, que es a lo que puede optar al cursar la carrera de Derecho, pues como es sabido la Universidad respectiva otorga el grado y la Corte Suprema, luego de cumplimiento de ciertos requisitos, concede el título profesional de abogado, agregando que puede ocurrir que el interés del acreedor de demandar la indemnización de perjuicios no sólo encuentre justificación en el hecho que estima que ella satisface de mejor manera su interés contractual sino, también, en el hecho de que no sea procedente el cumplimiento forzado del contrato, ni la resolución, y el acreedor no tenga otra alternativa que demandar la indemnización de perjuicios, lo que ocurre en este caso.

Por su parte en el considerando vigésimo entra al análisis de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, como un remedio autónomo frente al incumplimiento que hace consistir en la infracción al artículo 51 del Reglamento General del Alumno de la Universidad, que dispone en su inciso primero: “Solo se homologarán o convalidarán las asignaturas aprobadas dentro de los diez años anteriores a la fecha de solicitud de homologación. Este plazo no regirá respecto de los alumnos que acrediten experiencia laboral significativa en el área”.

Termina diciendo que la convalidación de estudios autorizada por la Universidad Autónoma, mediante resolución de la Dirección académica N°16/2010 de 26 de febrero de 2010, comprende asignaturas aprobadas por el postulante en la Universidad de



Concepción entre los años 1987 y 1995; materias que se encuentran fuera del plazo de 10 años permitido en el citado artículo del reglamento, sin que aparezca en la resolución de convalidación, que la institución universitaria hizo aplicación de la situación de excepción contemplada en la parte final de la aludida norma -experiencia laboral significativa en el área-, rechazándose en consecuencia su solicitud de juramento.

OCTAVO: Que en consecuencia no se observa la contradicción esgrimida por el recurrente de casación, por lo que se rechazará este arbitrio, toda vez que aun cuando se estimare que es confusa la redacción de ambos considerandos, el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo, tanto más cuando también se interpusieron en contra de la misma sentencia arbitrios de apelación.

RECURSO DE APELACION DEL DEMANDADO:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos 21°, 24° y 26° que se eliminan.

Del apartado 25° se quitan los tres primeros párrafos, manteniéndose en lo demás.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

NOVENO: Que el demandado agraviado impugna la decisión de la juez de la instancia pidiendo que se revoque la sentencia, cuestionando específicamente que se considere que el cumplimiento del contrato celebrado entre el actor y la universidad fue imperfecto, asimilando el grado otorgado por la universidad a un producto defectuoso, calificándolo de inidóneo por su falta de aptitud para el uso o fin deseado por el demandante.

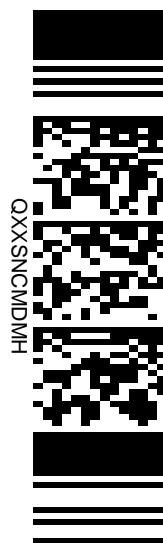
Afirma que su representada no vende productos sino que presta servicios que le permiten al alumno obtener el grado de licenciado, después de cursar los años de estudios respectivos y que el efecto práctico de lo resuelto por la Excma. Corte es que o se completaba la convalidación, lo que su representada hizo, sin que la Corte Suprema



lo aceptara, diciendo que el actor debe cursar las asignaturas que faltarían, que era la idea original de éste al ingresar a la Universidad Autónoma de Chile, puesto que el contrato se celebró para que el demandante estudiara la totalidad de los ramos de la carrera de derecho y no solamente algunos de ellos.

Sostiene que la convalidación de asignaturas es una situación excepcional, que no forma parte de los contratos a que se alude en la demanda, y que se efectúa en el sólo interés del solicitante y a su exclusiva petición, quien puede cursar la carrera en menos años y a un menor costo, lo que establece que el beneficio es exclusivamente para el actor, por lo que su parte sólo responde de la culpa lata, la que no fue probada en autos.

Expresa que ante lo resuelto por la Corte Suprema se le ofreció al actor que completara los estudios faltantes, a lo que no accedió, por lo que ella no se encuentra en mora de cumplir sus obligaciones y no debió ser condenada, ya que ha ofrecido todos los remedios al actor, quien no quiere aceptar ninguno de ellos, incluso más, durante la tramitación del proceso y pese a lo que indica la sentencia sobre el hecho de no haberse realizado la audiencia de conciliación por no haber concurrido esta parte, la misma si se realizó el día 31 de octubre de 2017, según estampado que rola a fojas 71 y corresponde al folio 28, donde aparece de manifiesto que no hay conciliación pese al hecho de asistir ambas partes, oportunidad que nuevamente se le ofreció al actor terminar sus estudios sin costo para él y conservándole sus ingresos privados, agregando que su parte está llana a brindarle al actor todos los medios a su alcance y le ha ofrecido cursar gratuitamente las asignaturas cuya convalidación fue rechazada por la Excma. Corte Suprema, negándose el actor sistemáticamente a ello, por lo que es el actor quien se encuentra en mora de cumplir al rechazar la terminación de sus estudios, negándose a cursar aquellas asignaturas, cuya convalidación no fue aceptada por la Corte Suprema.



Señala que debió rechazarse lo concerniente al daño moral, ya que los síntomas descritos por los testigos del mismo actor, devienen de una causa anterior a los hechos que motivan este juicio. Una enfermedad preexistente del actor, desconocida por su parte, de ahí que la indemnización de perjuicios por daño moral, sea improcedente o excesiva en todo caso, pues su parte sólo responde de los perjuicios previstos al tiempo del contrato y estos eran imprevisibles; estima vulnerado el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, al tener por acreditado el daño moral en base al mero informe pericial, en contradicción a lo dicho en la ficha médica y por los propios testigos del actor, esto es, su médico tratante neurólogo don Francisco Javier Chávez Rojas y su psiquiatra don Gonzalo Homero Díaz Pino, quienes señalan que los padecimientos del actor son de origen multifactorial, que los cambios en la enfermedad original del actor sólo sufrió leves cambios con tendencia a subir la glicemia, lo que fue de fácil control y que el actor tiene una personalidad sensitiva, “lo que lo hace más susceptible a reaccionar frente al estrés vital.” Sus propios médicos aclaran que el actor es reacio a seguir los tratamientos y las veces en que ha recaído, es debido a que dejó de cumplir las prescripciones de sus médicos.

Enfatiza que al decir la sentenciadora que la Universidad responde de culpa leve, lo agravia pues no ha incurrido en ese grado de falta, y no se condice con las indemnizaciones que concede, pues de estimarse leve la culpa, no cabe fijar una indemnización tan cuantiosa, agrega que no se tuvo presente al momento determinar el monto del daño moral o el posible rechazo a éste, ningún parámetro objetivo, sólo dice que lo fija prudencialmente, en la suma de \$ 95.000.000.- Para fijar el monto de la indemnización, se debe distinguir si la conducta fue dolosa o culposa; y, si la estima culposa debe atenderse a los grados de culpa que la ley establece, para graduar el monto de la indemnización, tal cual se hace, en la causas criminales cuando se atiende a la gravedad de las lesiones para fijar el quantum indemnizatorio,



superando en este caso el promedio de aquellas que se otorgan en caso de muerte, invalidez o de haber sufrido la víctima lesiones graves.

Dice que se pretende responsabilizar a su parte de todo perjuicio que pueda haber sufrido el actor, a pesar que el legislador señala que sólo aquellos que actúan con dolo responden de los perjuicios imprevistos, y los reclamados en autos incluso son indirectos, tienen un origen multifactorial, existen concausas que determinan el resultado.

Cuestiona se declare que para conceder una indemnización en forma autónoma e independiente de la acción del artículo 1489 del código sustantivo no requiera encontrarse en mora el deudor, lo que es erróneo y vulnera el artículo 1557 del Código Civil, puesto que la acción no es autónoma y si no hay mora es por cuanto la obligación aún puede cumplirse y los perjuicios no se generan, salvo los que devienen del simple retardo y estos en ningún caso alcanzan a las sumas fijadas en autos, aduciendo que en el caso de autos adquiere mayor relevancia del momento que con fecha 08 de enero de 2018, en plena tramitación del proceso, la Excma. Corte Suprema cambió el criterio interpretativo de la convalidación de ramos rendidos hace más de 10 años establecido en las instrucciones del año 2008 y 2015, actualmente vigente en el texto refundido contenido en el Acta N° 173 de 20 de noviembre de 2017, que establece: “Por consiguiente, no cabe más que concluir que todas aquellas convalidaciones autorizadas por las universidades antes del 11 de enero de 2016 han de ser examinadas a la luz de las reglamentaciones universitarias particulares y, en la medida en que se encuentren arregladas a éstas, han de ser consideradas regularmente obtenidas, aunque la sentencia impugnada, después de rechazar la acción principal por haberse cumplido el contrato sostiene que, la obligación de su parte es conferir una licenciatura que no sea reprochada por la Excma. Corte Suprema y que habilite al demandante para jurar como abogado, sosteniendo que el contrato se cumplió imperfectamente.



Dice que el cambio interpretativo tiene importancia capital en la causa, puesto que la situación del demandante se encuentra entre aquellas que pueden ser reconsideradas por la Excma. Corte Suprema utilizando el nuevo criterio establecido en la resolución aludida, cosa que además demuestra que el juramento es resorte exclusivo de dicho tribunal superior y que su representada no tiene ninguna injerencia o responsabilidad en la negativa sufrida por el actor, quien debiera solicitar a la Excma. Corte Suprema una reconsideración administrativa o un téngase presente el nuevo criterio para juramento de abogados, para posteriormente determinar si su representada tiene o no culpa por el daño moral sufrido, se encuentra o no en mora, debe o no indemnizar, infringiendo la sentencia lo previsto en el artículo 1551, 1552 y 1498 todos del Código Civil, acotando que mientras ello no ocurra, debe aplicarse lo señalado en el artículo 1552 del Código Civil, que exige que cada parte debe hacer lo que le corresponde para obtener el cumplimiento del contrato y mientras no lo haga la contraparte no se encuentra en mora de cumplir, indicando que el actor aún podría jurar como abogado, pudiendo completar sus estudios en el país o en el extranjero, pero se necesita de un acto suyo para llegar a obtener su título de abogado.

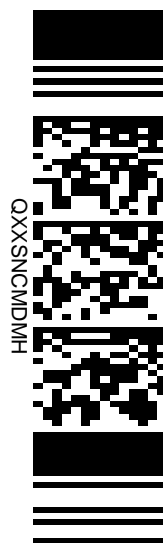
Expresa que de aceptarse la interpretación contraria, de que no es necesario estar en mora para obtener una indemnización autónoma del cumplimiento del contrato, que el actor podría obtener la indemnización y después igualmente jurar como abogado, obteniendo una indemnización sin haber sufrido perjuicio, pugna con el derecho, pues se indemniza sin culpa, sin daño y se produce un enriquecimiento sin causa del actor, puesto que obtiene indemnización por el incumplimiento y jura como abogado. Continúa diciendo que para que sea procedente la indemnización, tal como lo señala la sentencia, no debe haber otra forma de cumplimiento del contrato, que no sea el cumplimiento por equivalencia, desconociendo si ello es efectivo o no, puesto que el actor no quiere solicitar la reconsideración que el



máximo tribunal le ofrece en el instructivo aludido, ni quiere intentar ningún otro remedio.

Por último sostiene que la negativa del juramento se debe a un acto de autoridad ejecutado por la Corte Suprema en ejercicio de sus atribuciones y competencias, constituido por las diferentes actuaciones y resoluciones adoptadas por el máximo tribunal de justicia, lo que se encuentra probado en autos por el expediente de juramento acompañado con la debida ritualidad procesal. Afirma que a pesar de encontrarse probado en autos de manera legal dicha “fuerza mayor”, el tribunal ni siquiera considera ni menciona la causa por la cual rechaza esta alegación, sobre todo ocurrida antes de la modificación del criterio interpretativo de las instrucciones para el juramento de los postulantes a abogado impartidos por la Corte Suprema, agregando que de aceptarse la concurrencia del “acto de autoridad” o “fuerza mayor”, no existe ninguna posibilidad de condenar a su representada a pagar daño moral y menos daño material, pues dicha causal exime de responsabilidad total en los hechos a su representada, ya sea en la acción principal o la acción subsidiaria.

En suma concluye que la sentencia agravia a su parte, pues no se cumplen los requisitos para otorgar una indemnización de perjuicios y que su parte no ha incurrido siquiera en culpa leve. No existe relación de causalidad, por ser el daño de origen multifactorial, como señalan su propios médicos, y estos tampoco fueron probados, en cuanto a su monto, vulnerándose entonces el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil señala que: “ Cuando una de las partes haya de ser condenada a la devolución de frutos o a la indemnización de perjuicios, y se ha litigado sobre su especie y monto, la sentencia determinará la cantidad líquida que por esta causa deba abonarse, o declarará sin lugar el pago, si no resultan probados la especie y el monto de lo que se cobra, o, por lo menos, las bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia. El sentenciador sólo aplica este criterio para desestimar, y con razón, la acción por lucro



cesante, pero igualmente ese razonamiento procede para rechazar el cobro por daño moral, que tampoco fue probado, su existencia y magnitud es dudosa y su cuantía desconsiderada, concluye pidiendo la revocando de la sentencia en aquello que agravia a su parte, negando lugar a la demanda principal y la subsidiaria, con costas.

DÉCIMO: Que si bien este tribunal de alzada concuerda, en lo medular, con lo aseverado por la sentenciadora en el apartado 19° del fallo impugnado, no es menos cierto que los licenciados en ciencias jurídica y/o sociales pueden optar, expresa o tácitamente, a quedar con el grado que confiere la Universidad o continuar con la tramitación señalada por la ley para recibir el título de abogado, previo juramento ante el Pleno de la Corte Suprema, como lo ordena el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, que resulta ser a lo que, mayoritariamente, aspiran los que adquieren el grado de Licenciados en Ciencias Jurídicas, tanto más cuando todas las escuelas de Derecho del país en la publicidad de la carrera expresan de una u otra forma que los estudios habilitan para la obtención del título de abogado o abogada que otorga la Corte Suprema de Justicia, como queda establecido para el caso de autos en los considerandos reproducidos del fallo de base.

El Código Orgánico de Tribunales en el artículo 521 ya mencionado señala que otorgará el título en la medida que el candidato reúna las exigencias de los artículos 523 y 526 del mismo cuerpo legal, y la Corte Suprema, vía autos acordado o actas, ha regulado la forma de cumplimiento de las exigencias de esos dos artículos.

UNDÉCIMO: Que en autos se ha arribado a la conclusión que el contrato es imperfecto del momento que la Universidad no dio cabal cumplimiento a la convalidación de ramos que el alumno rindió en la escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, específicamente por no haberse demostrado previo a la convalidación, que poseía experiencia laboral significativa en el área.



No cabe duda que el actor estudió en la mencionada Casa de Estudios penquista, donde rindió los exámenes de conocimientos de cada asignatura lo que le fue certificado positivamente; también continuó sus estudios en la Universidad demandada, rindiendo su examen de grado y, con los antecedentes por él aportados, se apersonó ante la Excma. Corte Suprema para que se le otorgara el título de abogado, lo que se le rechazó.

El motivo de dicho rechazo, como queda plasmado en la resolución de 18 de agosto de 2015, fue el tiempo transcurrido entre la fecha en que se rindieron los ramos en Concepción y la convalidación en la universidad demandada, más de 10 años sin que se señalara la causal de excepción a que se ha hecho referencia precedentemente. Es decir hubo un proceso erróneo en la convalidación de los ramos cursados por el actor.

La Casa de Estudios demandada, trató de enmendar esa omisión mediante la Resolución de Rectoría N°04/2016, que complementa la N°16/2010, la que tampoco fue apta para variar el criterio del máximo tribunal, como se lee en la resolución de 28 de junio de 2016, a pesar que dicha decisión tuvo 4 votos en contra que estimaron que el licenciado cumplía con los requisitos para obtener su título de abogado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que para determinar la existencia de los daños es necesario previamente hacer un distingo, entre los dos momentos que se dirán, tanto más cuando hablamos de cumplimiento imperfecto del contrato.

En la especie el actor cursó primeramente sus estudios en la escuela de derecho de la Universidad de Concepción, desde el año 1987 al año 1995, cumpliendo con toda la malla curricular, para posteriormente por voluntad propia en enero del año 2010 solicitar a la escuela homónima de la Universidad Autónoma de Chile sede Talca la convalidación de sus estudios, siendo pacífico que se accedió a ello. En base a ellos logra adquirir el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, lo que no resulta inocuo como se pretende, ya que habilita al que lo



obtiene, entre otras cosas, para ejercer en la academia, como hay varios ejemplos que pudieran citarse, como también en trabajos donde solo se le exija licenciatura.

A lo que sí está, actualmente impedido, es a recibir el título de abogado que estaba entre las expectativa que le ofrecía la Universidad y, consecuentemente, a ejercer la abogacía, esto es, la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes.

De consiguiente resulta acreditado que sufrió un menoscabo derivado de la imposibilidad de titularse como abogado. En cambio no se produjo tal merma en sus estudios que le permitieron acceder al grado de licenciado, por lo que la pretensión de que se le indemnice como daño emergente el pago de matrícula y aranceles universitario derivaría en un enriquecimiento sin causa; en cambio debe indemnizarse ese daño emergente respecto a los gastos en que incurrió a partir del inicio de los tramites destinados a obtener el título de abogado momento en el cual se vio frustrado su proyecto profesional como abogado.

Por lo mismo se mantendrán como indemnizables por concepto de daño emergente los gastos de medicamentos, en que ha debió incurrir a propósito del daño emocional a que alude el perito psicólogo clínico, don Gerardo Chandía, y los recetados por los médicos que lo han tratado en este periodo, que según la pericia contable, que se lee en el folio 272, se tienen por ciertos y equivalentes a \$937.670, más valor de consulta médica por un monto de \$45.000, desestimándose los demás gastos solicitados a título de daño efectivamente causado.

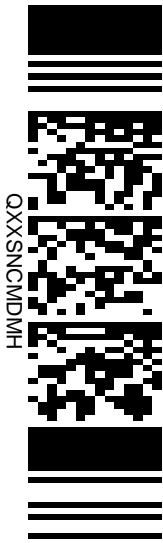
DÉCIMO TERCERO: Que respecto al daño moral, conforme a lo dispuesto por el artículo del 425 del Código de Procedimiento Civil, el peritaje psicológico que permitiría acceder a lo pedido, debe ser analizado conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, las de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, que según el profesor Bordalí “se deben



convertir en el camino que se debe recorrer en la valoración de estos informes, que deben servir a su crítica sostenida en la razón, la madurez, el buen sentido y el sano juicio, que son el soporte de una valoración probatoria razonada, responsable y motivada, que se aparte de la mera discrecionalidad (Bordalí Salamanca, Andrés y otros. *Proceso civil. El juicio ordinario de mayor cuantía, procedimiento sumario y tutela cautelar*. Santiago, 2014, Ed. Legal Publishing Thomson Reuters, p. 249).

Es preciso adelantar que una pericia se valida, como ya lo ha dicho esta Corte, no en sus afirmaciones, ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino que en su mayor o menor fundamentación y razón de ciencia, por lo que debe tenerse como prevalente aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una superior explicación racional, siendo esas exigencias las que se tienen en consideración para estimar si el peritaje es o no consistente y determinar si el peritaje psicológico logra fuerza probatoria, para lo cual debe observarse si su estructura es bien definida y sus conclusiones adecuadamente articuladas, de modo que los apartados del informe otorguen todos los elementos objetivos de los cuales el juez pueda valerse al momento de valorar la probanza, conteniendo todos los elementos que requiere el juez para resolver.

DÉCIMO CUARTO: Que, en el caso de autos, el perito luego de sus análisis concluye que el actor presenta un daño emocional grave presentando un cuadro de depresión mayor lo que desarrolla en el informe pericial; sin embargo el demandado cuestiona aquello, afirmando que las dolencias devienen de una causa anterior a los hechos que motivan el juicio, de una enfermedad preexistente, por lo que aduce que la indemnización de perjuicios por daño moral es improcedente o excesiva en todo caso, acotando que él sólo responde de los perjuicios previstos al tiempo del contrato, los que eran imprevisibles, basándose para ello en la ficha médica del médico



tratante neurólogo don Francisco Javier Chávez Rojas y del testimonio de su psiquiatra (sic) don Gonzalo Homero Díaz Pino.

La lectura que hace el demandado, solo es demostrativa que el actor tiene una personalidad sensitiva, que lo hace más susceptible a reaccionar frente al estrés vital, por lo que el trauma a que se vio expuesto, al no obtener su título profesional, le provocó una agudización de aquel estrés vital a que se refiere el médico señor Díaz. Y en cuanto a que los padecimientos del actor son de origen multifactorial como lo refiere el neurólogo Claver, éste al referirse a la última vez que lo atendió el año 2016, señala que presentaba un “claro brote depresivo”.

De la ponderación conjunta de los medios de prueba señalados en la sentencia de base y reproducidos en este fallo se encuentra establecido que la circunstancia que el actor no pudiera obtener su título de abogados le produjo un sufrimiento que agravó su estado depresivo natural, lo que se tradujo en un daño emocional.

Así las cosas la indemnización del daño moral sufrido por el actor es procedente, pero la circunstancia que sus estados depresivos sean preexistentes influye en su quantum, pero además para resolver éste, es necesario contextualizar el escenario donde se produce la imperfección contractual.

DÉCIMO QUINTO: Que sin perjuicio de la relación de causalidad asentado por el juez de base respecto al cumplimiento imperfecto y a los daños sufridos, no es menos cierto que la demandada trató de revertir la situación, a pesar de lo cual la Corte Suprema no accedió a mutar su primera decisión, manteniendo la negativa a entregar el título de abogado al actor, siendo destacable que 4 ministros fueron de parecer de otorgarle el mencionado título, estimando suficiente lo aseverado por la Universidad.

Pero, lo más relevantes, es que con fecha 8 de enero de 2018, la Excma. Corte Suprema cambió el criterio interpretativo de la convalidación de ramos rendidos hace más de 10 años, establecido en



las instrucciones del año 2008 y 2015, actualmente vigente en el texto refundido contenido en el Acta N° 173 de 20 de noviembre de 2017, que establece: “Por consiguiente, no cabe más que concluir que todas aquellas convalidaciones autorizadas por las universidades antes del 11 de enero de 2016 han de ser examinadas a la luz de las reglamentaciones universitarias particulares y, en la medida en que se encuentren arregladas a éstas, han de ser consideradas regularmente obtenidas, aunque lo hubieran sido superado el plazo de los diez años de antigüedad de los estudios validados hoy”.

Interpretación que permite al actor solicitar a la Excma. Corte Suprema la reconsideración de la resolución del año 2015, utilizando el criterio que se ha señalado.

En todo caso, como aquello no se ha acreditado, mantiene vigencia los razonamientos de la juez a quo, en lo reproducido en este fallo, pero en todo caso rebajando el quantum de la indemnización, como se dirá en la parte resolutive.

RECURSO DE APELACION DEDUCIDA POR EL ACTOR:

DÉCIMO SEXTO: Que el agravio que hace valer el actor dice relación con los montos determinados en la sentencia en cuanto al daño emergente y daño moral sufrido, así como el rechazo de la indemnización por lucro cesante, sosteniendo que no se condicen con el mérito del proceso.

Atendido lo razonado en los motivos anteriores se desestimaré lo pretendido por este apelante en cuanto al daño emergente.

En cuanto al lucro cesante, también se desestima lo pedido en el arbitrio del actor, pues no se observan razones suficientes para modificar lo concluido por la juez de base.

Conforme a lo razonado disposiciones legales citadas en el cuerpo de esta sentencia y visto, además, lo dispuesto en los artículos 145, 186 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza la



excepción de prescripción extintiva de la acción deducida por la parte demandada, sin costas.

Se rechaza, además, el recurso de casación en la forma, interpuesto por la demandada, Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, en contra de la sentencia dictada el siete de febrero del presente año, en causa rol C-1648-2017 del Cuarto Juzgado de Letras de Talca, sin costas.

Se confirma, la aludida sentencia, con las siguientes declaraciones:

- 1.- Que se reduce la indemnización por concepto de daño emergente a la suma de novecientos ochenta y dos mil seiscientos setenta pesos \$ 982.670.-
- 2.- Que se reduce a \$30.000.000 la indemnización por concepto de daño moral.
- 3.- Que las sumas señaladas precedentemente deberán pagarse por la Universidad Autónoma de Chile, con los reajustes que se devenguen desde el día 13 de noviembre de 2015, fecha de la Resolución de la Excma. Corte Suprema que denegó conceder el título de abogado al actor don Reinaldo Yáñez González, hasta el pago efectivo de la deuda. En cuanto a los intereses, éstos se deberán desde la fecha de la notificación de la demanda, hasta su entero y cumplido pago; intereses que serán los corrientes para operaciones no reajustables.
- 3.- Que se exime a los litigantes del pago de las costas de esta instancia.

Se previene que al Abogado Integrante don Abel Bravo Bravo, estuvo por rebajar en \$50.000.000 el monto de la indemnización por daño moral

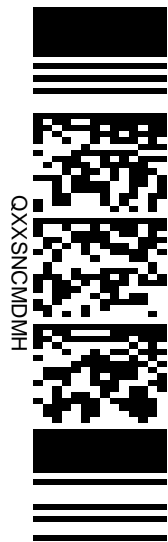
Redacción del presidente de la Primera Sala, ministro don Rodrigo Biel Melgarejo.

Regístrese y devuélvase.

Rol 1428-2018 a la que acumularon las causas roles 1476-2018; 510-2019 y 511-2019.Civil



No firma el Abogado Integrante don Abel Bravo Bravo, por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Rodrigo Biel M. y Fiscal Judicial Oscar Lorca F. Talca, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.

En Talca, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

